



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO  
JUZGADO VEINTISÉIS ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DE BOGOTÁ D.C.

---

Bogotá D.C., quince (15) de septiembre de dos mil veinte (2020)

**RADICADO:** 11001-33-35-026-2019-00402-00  
**MEDIO DE CONTROL:** NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO  
**ACCIONANTE:** JOSE MARIO PÉREZ PIRATOVA  
**ACCIONADO:** UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL - DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

Estando el proceso al Despacho para señalar la fecha y hora para la realización de la audiencia inicial, se observa que en su contestación, la parte demandada propuso las excepciones de prescripción y de caducidad del medio de control, que a la luz del numeral 6° del artículo 180 de la Ley 1437 de 2011 y del artículo 12 del Decreto 806 de 2020, tiene el carácter de previas (f. 172).

Ahora bien, en el artículo 12 del Decreto 806 del 4 de junio de 2020, determinó que en materia Contencioso Administrativa, de las excepciones presentadas se correrá traslado por 3 días, término dentro del cual la parte demandante podrá pronunciarse sobre ellas y, si fuere el caso, subsanar los defectos anotados en las excepciones previas.

La misma norma señala que las excepciones previas se formularán y decidirán según lo regulado en los artículos 100, 101 y 102 del C.G.P., y que cuando se requiera la práctica de pruebas a que se refiere el inciso segundo del artículo 101 *ibídem*, el juzgador las decretará en el auto que cita a la audiencia inicial, y en el curso de esta las practicará y decidirá sobre los medios exceptivos de carácter previo.

En armonía con lo anterior, dentro del presente asunto la parte demandada argumentó, de una parte, que los derechos no reclamados en tiempo fueron afectados por el término prescriptivo trienal, y de otro lado, que el término para interponer la demanda es de 4 meses tal como lo contempla el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.

Así las cosas, con el fin de continuar con el trámite correspondiente, es del caso pronunciarse respecto a los medios exceptivos propuestos por la demandada, y para tal fin, en primer lugar se abordará lo relativo a la **caducidad del medio de control**.

En relación con la oportunidad para presentar la demanda, a diferencia de la desafortunada redacción del medio exceptivo al referirse a una norma derogada

y sin precisar porqué operó la caducidad, el literal “d” numeral 2° del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 preceptúa que cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, el término para presentar la demanda es de cuatro meses contados desde el día siguiente a la comunicación, notificación, ejecución o publicación de la decisión según el caso; salvo que se trate de actos que reconozcan o nieguen prestaciones periódicas, entre otras circunstancias, evento en el cual la demanda podrá interponerse en cualquier tiempo, tal como lo señala el literal “c” del numeral 1° de la misma norma.

Ahora bien, dentro del presente asunto se solicita declarar la nulidad del acto administrativo 100000202-00057 del 15 de enero de 2017, así como de la Resolución 001607 del 4 de marzo de 2019, por medio de los cuales se negó el reconocimiento y pago de los incentivos por fiscalización y cobranzas y el nacional, hoy denominados, prima de gestión, tributaria, aduanera y cambiaria, y se resolvió en forma desfavorable un recurso de reposición, respectivamente (f. 5).

Por otra parte, conforme a los hechos relatados por la parte actora durante el traslado de excepciones (f. 184), la Resolución 001607 del 4 de marzo de 2019 le fue notificada por aviso recibido el 13 de abril de 2014, sin que hasta el momento exista discusión sobre este hecho, en cuyo caso, este debe tenerse por cierto<sup>1</sup>, si se tiene en cuenta que tal aviso data del 12 de abril de 2019 (f. 48).

De acuerdo con este panorama y bajo la premisa de que dentro del expediente aún no se ha demostrado la desvinculación del demandante de la DIAN, a la fecha de presentación de la demanda, cualquier pedimento relativo al reconocimiento o reliquidación de los emolumentos devengados en vigencia de la relación laboral, gravitaría en torno a prestaciones de carácter periódico, de modo que los actos que se pronuncien frente a ello, podían demandarse en cualquier tiempo<sup>2</sup>, de conformidad con el literal “c” del numeral 1° del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011.

En gracia de discusión, si el fenómeno preclusivo operara, y partiendo de la premisa que el acto respecto del cual habría de calcularse la caducidad, es la Resolución 001607 del 4 de marzo de 2019 por ser la que concluyó el procedimiento administrativo, al contar los 4 meses a los que alude el literal “d” numeral 2° del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, desde la fecha de su notificación por aviso el 13 de abril de 2019, y en todo caso, tomando en cuenta la suspensión de términos que ocasionó el trámite conciliatorio como requisito de procedibilidad; inicialmente el término de caducidad transcurriría hasta el 14 de agosto de 2019, sin embargo, del 26 de junio al 2 de agosto de ese mismo año (ff. 82 y 83), se suspendió el cómputo del periodo de 4 meses, postergándolo así hasta el 23 de septiembre de 2019<sup>3</sup>, siendo que la demanda ya se había presentado desde el día 4 de los mismos mes y año (f. 98).

---

<sup>1</sup> Esto, solo para los efectos de la decisión del medio exceptivo propuesto por la parte demandada.

<sup>2</sup> C.E., S.2ª., sentencia de abril 30/2020, rad. int. 1538-17, M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.

<sup>3</sup> Entre el 26 de junio y el 14 de agosto de 2019, transcurrieron 50 días calendario, que se computan con ese criterio, teniendo en cuenta que la singularidad del caso, ocasionó la fragmentación del término de 4 meses calendario, en cuyo caso, por seguridad jurídica y favorabilidad, para el cálculo de los días restantes debe seguirse la misma regla; premisa bajo la cual, esos 50 días se reanudarían a partir del 3 de agosto cuando concluyó el trámite conciliatorio como requisito de procedibilidad, y se prolongaron hasta el 23 de septiembre de 2019.

Así las cosas, queda claro que dentro del presente asunto no resulta aplicable la caducidad del medio de control y mucho menos se configuró dicho fenómeno, lo que fuerza a concluir que la excepción planteada en tal sentido, no tiene vocación de prosperidad, y así se decidirá en la parte resolutive de este auto.

En cuanto a la excepción de **prescripción**, debe decirse que ella solamente puede ser objeto de pronunciamiento en esta etapa cuando sea de carácter **extintiva**, es decir, cuando de llegar a prosperar, daría por terminado el proceso, motivo por el cual el despacho se pronunciará frente a la misma al momento de dictar sentencia, siempre y cuando haya lugar a accederse a las pretensiones de la demanda.

Por lo expuesto, este Despacho

### **RESUELVE:**

**PRIMERO: DECLARAR NO PROBADA** la excepción de caducidad del medio de control promovido dentro del expediente de la referencia, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de este proveído.

En cuanto a la prescripción alegada por la parte pasiva, la misma será objeto de pronunciamiento al momento de dictar sentencia, siempre que haya lugar a acceder a las súplicas de la demanda.

**SEGUNDO:** Al no hallarse probado hasta el momento ningún medio exceptivo con carácter de previo, esta etapa procesal queda concluida, sin perjuicio de la obligación que tiene el despacho de declarar cualquier otra que evidencie probada al momento de dictar sentencia.

**TERCERO:** En firme este proveído, el expediente habrá de ingresar al Despacho para continuar con el trámite correspondiente.

### **NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

 <b>JUZGADO VEINTISÉIS ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD</b> <b>CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C.</b> <b>SECCIÓN SEGUNDA</b>  Por anotación en <b>ESTADO ORDINARIO</b> notifico a las partes la providencia anterior hoy <b>16 DE SEPTIEMBRE</b> <b>DE 2020</b> , a las ocho de la mañana (8:00 a.m.)  <b>LIZZETH VIVIANA CANGREJO SILVA</b> <b>SECRETARIA</b>
---

Firmado Por:

ANDRES JOSE QUINTERO GNECCO

JUZGADO 026 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO BOGOTÁ-CUNDINAMARCA

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: 8e46f296c384572ed90ee16ba7fa6f1aec3d7466ba6cca0db04140cef98831d6

Documento generado en 15/09/2020 11:01:26 a.m.